

C.A. de Concepción

rtp

Concepción, seis de noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTO:

Se reproduce la sentencia enalzada, con excepción de la palabra “demandante” consignada en el considerando 10º, párrafo 1º, línea 9 que se sustituye por la palabra “demandada”.

Y SE TIENE EN SU LUGAR, ADEMÁS, PRESENTE:

PRIMERO: Que, para una acertada resolución de lo controvertido se debe tener especialmente en consideración que la controversia se reduce a que la actora afirma que los pagos que efectuó a la demandada Soterra SpA, en razón de estados de pago basados en la existencia del contrato N°BB31086056 “Plan de Relocalización de las Poblaciones El Triángulo y Villa El Triángulo de la Comuna De Hualpén”, que en total ascienden a la suma de \$9.031.000, son indebidos, sea porque se pagaron en duplicidad, sea porque no eran parte del contrato o porque no se ejecutaron las obras.

En este punto, la demandada refiere que nada adeuda, porque los servicios se prestaron satisfactoriamente, tan es así, que previo a la emisión de las facturas respectivas, existió la aprobación de los correspondientes estados de pago.

SEGUNDO: Que, el apoderado de la parte demandada dedujo recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva dictada con fecha 31 de marzo de 2023, por el Primer Juzgado Civil de Concepción, que acogió la demanda de reembolso o restitución de pago de lo no debido, por responsabilidad cuasicontractual interpuesta por Enap Refinerías S.A en contra de Constructora Soterra SpA, y condenó a la demandada a pagar a la demandante la suma de \$9.031.167 a título de reembolso.

Funda el recurso, en lo medular, en que la sentencia recurrida no da las razones del por qué el documento “Términos de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXNHXQPXKFX

Referencia/Marco Teórico-Plan de Relocalización” lleva a la convicción al tribunal de que se efectuaron pagos en exceso que deba restituir; así como tampoco valora todas las notas de crédito que rolan en autos -N°42, 43, 44 y 46-, sino solo las N°47 y 48, dando a entender que los únicos montos restituidos son \$20.000.000 y \$5.317.188.

Añade que de la prueba rendida no logra acreditarse un pago por servicios no prestados, por lo que señala que la sentencia carece de fundamento, puesto que no señala como de la prueba documental y testimonial rendida, se llega a la conclusión de que la demandada adeuda la suma de \$9.031.167, por lo pide se revoque la sentencia recurrida y, en su lugar, se rechace en todas sus partes la demanda.

TERCERO: Que, el artículo 2295 del Código Civil en su inciso 1° dispone *“Si el que por error ha hecho un pago, prueba que no lo debía, tiene derecho para repetir lo pagado”*.

El pago de lo no debido -como todo cuasicontrato- es un hecho voluntario, lícito, no convencional y generador de obligaciones.

CUARTO: Que, para que prospere la acción establecida en el artículo 2295 del Código Civil, deben concurrir copulativamente los siguientes presupuestos: **a)** el hecho del pago; y **b)** que el pago era indebido, esto es, que no existía una obligación ni aun puramente natural, o si existía, el que pagó no era el deudor o, en caso de serlo, no hizo el pago al verdadero acreedor.

QUINTO: Que, de conformidad con las reglas generales corresponde al actor probar el hecho del pago, (lo que fue reconocido expresamente por la demandada), así como también que este fue indebido.

Probado lo anterior, debe suponerse ejecutado por error. De lo contrario, al demandado corresponde probar que no hubo tal error, sino cabal conocimiento de las cosas por quien lo efectuó¹.

¹ Meza Barros Ramón, Manual de Derecho Civil, “De las fuentes de las obligaciones”, Novena edición actualizada, Tomo II, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1997, pág. 336.



SEXTO: Que, para satisfacer su carga probatoria el demandante rindió prueba documental, la cual no fue objetada, en virtud de la cual se logra acreditar que existió una duplicidad de pago por concepto de servicios adiciones, gastos generales y servicios.

En efecto, respecto de los primeros, **-servicio de desratización-**, del mérito del documento denominado “Términos de Referencia/Marco Teórico-Plan de Relocalización”, aparece que el ítem 2.2.1 “Servicio de control de plagas” (relativo a 289 viviendas asociadas al proceso de demolición y relocalización), y el ítem 2.2.1.1 sobre desratización para las viviendas que no son parte del proceso, (pero si están contiguas o cercanas a las que se demolerán); se encuentran incluidos dentro del ítem “2. Desconexiones de servicios y permisos de demolición”. Luego, del mérito de los estados de pago N°1, 3 y 4 acompañados, aparece que se pagaron 398 servicios de desratización, correspondientes a 251 viviendas pertenecientes al proceso de relocalización, más 147 adicionales solicitadas por la Seremi de Salud para viviendas contiguas. A lo antedicho se suma que en la Minuta de Finiquito del Plan de Relocalización del 20 de junio de 2020, aparece que Soterra realizó un total de 94 demoliciones. Así las cosas, la devolución a través de notas de crédito de montos por concepto de “2.2.1.1-Servicio adicional” que fueron cobrados dos veces, correspondió a un monto equivalente a 73 servicios de desratización.

En razón de lo anterior, y el mérito del Informe final de investigación especial N° 92 de fecha 9 de julio de 2021, la suma a restituir por parte de Soterra SpA a Enap S.A, por concepto de reembolsos correspondientes a los pagos efectuados bajo el ítem “2.2.1.1-Servicio adicional”, corresponde a la diferencia entre las 94 viviendas demolidas y la devolución de 73 servicios de desratización previamente efectuados por demandada, quedando pendientes **21 servicios adicionales**, por un monto total de \$2.974.000.-

A lo reflexionado, se suma lo consignado en el Libro de Obra Maestro N°: M23876-CL04, folio N°409 de 21 de junio de 2019,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXNHXQPXKFX

-asunto desratización-, en el que aparece que Carlos Díaz Cabrera (Administrador de Enap) comunica a Cristian Merino Paredes (Administrador Técnico empresa Soterra), que conforme a lo señalado en reunión sostenida en la División de Contratos Enap Bio Bio, el día Viernes 14 de Junio de 2019, en presencia de Francisco Zúñiga, (Jefe de División Contratos Enap), Teofenes Sovino (Director de proyectos Comunidades Enap), Vanessa Bustos (Administradora Comercial Enap), Carlos Díaz (Administrador Técnico Enap) y **Cristian Merino (Administrador Técnico empresa Soterra)**, este último señaló que lo cobrado en los estados de pago por concepto (Servicios Adicionales) Ítem 2.1 que corresponden a las 289 viviendas del Plan de Relocalización, serían descontados al momento de generar estados de pagos por demolición de viviendas.

Luego, en el mismo Libro de Obra Maestro, folio N°410 de 24 de junio de 2019, -asunto desratización-, aparece que Cristian Merino Paredes (Administrador Técnico empresa Soterra), refiere a Carlos Díaz Cabrera (Administrador de Enap) que es efectivo lo que se indica precedentemente.

En lo que respecta al ítem **Gastos Generales**, cabe señalar que éste no formó parte del proceso de licitación, ni tampoco de la oferta económica, por tanto, no existe este concepto en los Términos de Referencia. No obstante lo anterior, este apartado consta en los estados de pago acompañados, los que fueron pagados en su oportunidad por la demandante. Concordante con lo expuesto, resulta el mérito del Informe final de investigación especial N°92 de fecha 9 de julio de 2021 y el hecho que la demandada materializó restitución de dinero a través de la nota de crédito N°48 de 30 de diciembre de 2019, en cuya descripción refiere “Devolución EEPP² N°1 de 02 de Febrero 2019 Contrato BB31086056 Plan de Relocalización de las Poblaciones el Triángulo y Villa el Triángulo de la comuna de Hualpén”, por la suma total de \$20.000.000.-

² Estado de Pago.



Finalmente, en relación al **ítem Servicios** (traslado (1), desconexiones de servicios y permisos de demolición (14), demolición de vivienda (1) e inhabilitación del terreno y mejoramiento de muros de pareo (2)), su reintegro se materializó a través de la nota de crédito N°47 de 30 de diciembre de 2019 emitida por Constructora Soterra SpA, en cuya descripción refiere “Devolución duplicidad en diversas partidas en EEPP del 4 al 7. Contrato N°BB31086056 Plan de Relocalización de las Poblaciones el Triángulo y Villa el Triángulo de la comuna de Hualpén”, por la suma total de \$5.317.188.-

El estado de pago N°4 aludido en la Nota de Crédito N°47, refiere a “2. Desconexiones de servicios y permiso de demolición \$269.072; 2.1 Servicio Adicional, \$118.992, ejecutadas a la fecha \$47.358.816; en el periodo anterior \$37.839.456 y en el presente estado de pago \$9.519.360.

En consecuencia, del mérito de las notas de crédito N°47 y 48 se reconoce las restituciones asociadas al cumplimiento del contrato.

Lo antedicho, además, se ve reforzado con los dichos de los testigos Álvarez Alday y Parra Venegas, quienes se encuentran contestes en señalar que luego de una auditoria efectuada por la Contraloría General de la República para determinar sanciones administrativas, se instruyó tomar acciones para restituir montos pagados en exceso. En efecto, refieren que por medio de la auditoría se detectó doble cobro en algunos ítems por parte de la empresa demandada, como pagos por gastos generales y demoliciones, traslados, desconexión de servicios, permisos de demolición y desratización, entre otros. Aducen, que la empresa hizo reembolsos de ciertos montos, pero aún existe una diferencia de poco más de nueve millones de pesos. Estos excesos de pago se detectaron asociados a los primeros estados de pago; empero aún se debe \$3.800.000 correspondiente al IVA de \$20.0000000 restituidos; \$3.000.000 que corresponde a servicios de desratización no restituidos, correspondiente a 21 viviendas, y \$2.257.000 por un traslado, una demolición, un cierre de terreno o



inhabilitación de terreno y 14 desconexiones de servicios y permisos de demolición, que la auditoría detectó que se habrían pagado, pero no se habrían ejecutado en la práctica.

La referida prueba testimonial, conforme lo establece el artículo 384 N°2 del Código de Procedimiento Civil, tal como lo señala el tribunal *a quo*, constituye plena prueba en cuanto a que la demandada recibió pagos indebidos, sea porque se pagaron en duplicidad, sea porque no eran parte del contrato, sea porque no se prestaron los servicios, toda vez que se encuentran contestes en el hecho y en sus circunstancias esenciales, sin tacha, legalmente examinados, dan razón de sus dichos, y el contenido de sus declaraciones no ha sido desvirtuado por prueba en contrario.

SÉPTIMO: Que de esta manera, tal como se señala en el considerando 11° de la sentencia recurrida, establecida como se encuentra la existencia de la deuda y su monto, era a la parte demandada a quien correspondía justificar, según las reglas del onus probandi, el cumplimiento de su obligación de reintegro, empero nada de ello ocurrió.

OCTAVO: Que, no altera lo concluido el mérito de las demás notas de crédito acompañadas (N°42, 43, 44 y 46) por cuanto no puede concluirse que ellas tengan relación alguna con el pago de lo aun adeudado, habida cuenta que la N°42, 43 y 44 se refieren a servicios adicionales, sin especificación alguna, y la N°46 a Estado de Pago N° 10, sobre obras ejecutadas, en el marco del Plan de Relocalización de las poblaciones El Triángulo y Villa el Triángulo de Hualpén; y los pagos indebidos se detectaron y asociaron a los primeros estados de pago, no al N°10.

NOVENO: Que, en mérito de lo que ha quedado asentado en el apartado anterior, aparece que la restitución de la suma de dinero indicada que pide la demandante, es del todo procedente, pues a la luz de las probanzas allegadas a la causa, corresponde a un pago indebido efectuado por error; concluyéndose que la sentencia se ajusta a derecho



y por ende, han de desestimarse las alegaciones formuladas en el escrito de apelación.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se **CONFIRMA**, sin costas, la sentencia apelada de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, dictada por el Primer Juzgado de Letras en Lo Civil de Concepción.

Regístrese y devuélvase.

Redacción de la Ministra interina Antonella Farfarello Galletti.

N°Civil-1186-2023.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXNHXQPXKFX

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Concepción integrada por Ministro Camilo Alejandro Alvarez O., Ministra Suplente Antonella Franchesca Farfarello G. y Abogado Integrante Francisco Javier Santibañez Y. Concepcion, seis de noviembre de dos mil veinticuatro.

En Concepcion, a seis de noviembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXNHXQPXKFX